DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO. DEBE TRAMITARSE PASADO UN AÑO DE CELEBRADO EL MATRIMONIO, SEA DE CARACTER ADMINISTRATIVO O POR RESOLUCION JUDICIAL.- La condición que establece el artículo 296 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, de promover divorcio por mutuo consentimiento pasado un año de la celebración del matrimonio rige tanto para el de tramitación administrativa como para el que se sigue ante autoridad judicial, ya que en ambos se requiere el mutuo consentimiento para decretarlo y la ley no hace distinción alguna.

Amparo en revisión 29/89. Eva González Gutiérrez. 9 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: José Solórzano Zavala.

Primer Tribunal Colegiado del IX circuito. Informe correspondiente al año de 1989. Tercera parte. Vol. II, pág. 922.

Ignacio GALINDO GARFIAS

El anterior criterio sostenido por el tribunal colegiado en materia civil no ofrecería, por sí mismo, ocasión de comentario alguno puesto que en rigor se limita a hacer una aplicación de la letra de la disposición contenida en el artículo 296 del Código Civil del Estado de Aguascalientes (concordante con el artículo 274 del Código Civil del Distrito Federal). Sin embargo, esta ejecutoria y particularmente el precepto legal que invoca, invita a reflexionar sobre la *ratio legis* que inspira el precepto de cita.

En efecto, el plazo de un año, contado a partir de la celebración del matrimonio, para iniciar el procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento, puede obedecer a razones de orden prudencial que el legislador tuvo en cuenta para establecer ese dispositivo. Esta es, por lo menos, la opinión generalizada.

Empero, parece que el tribunal sentenciador ha dejado pasar la oportunidad de resaltar claramente que la naturaleza misma de la institución del matrimonio es la que impone imperiosamente la necesidad de que transcurra el plazo de un año, que el propio precepto establece, para que los cónyuges que han convenido en divorciarse puedan solicitar "por mutuo consentimiento" el divorcio, ya sea judicial o administrativo.

Y la razón parece muy clara: el matrimonio es una institución social, antes que una mera relación particular entre los consortes. La sociedad está interesada, por encima de la voluntad de los contrayentes, en la solidez y permanencia del matrimonio. Aparece esta característica bien clara cuando se observa que la voluntad de los contrayentes no es suficiente para que éstos queden vinculados jurídicamente entre sí como marido y mujer.

Por ello el acto de la celebración del matrimonio es público y sólo queda perfeccionado mediante la declaración *solemne* del juez del Registro Civil que "en nombre de la ley y de la sociedad" declara unidos en legítimo matrimonio a los contrayentes.

Sólo así surge, para el derecho, el matrimonio, que es una institución social cuya voluntad se manifiesta mediante el juez competente, para que unida a la voluntad de los consortes, nazca el estado civil de casados que adquieren los contrayentes.

JURISPRUDENCIA

De ahí que no haya lugar a distinguir para ese efecto entre el divorcio por mutuo consentimiento, ya sea judicial, ya sea administrativo, para decretar en consecuencia la disolución vincular, tanto por vía judicial como administrativa.

Mucho ganaría en mi parecer la resolución judicial que comento si en ella se pusiera en relieve el carácter de acto mixto del matrimonio como acto público y privado a la vez, en el que deben concurrir, así para su celebración como para su disolución por divorcio, la voluntad de las partes y la del Estado.

Esta consideración servirá, sin duda, para distinguir la institución del matrimonio del concubinato o de otras uniones transitorias entre un varón y una mujer, como meras uniones consensuales.